

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA DE DECISIÓN LABORAL

El trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, procede a proferir sentencia de segunda instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por la señora **ANA CECILIA TORO DE ARCINIEGAS** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES** (en adelante COLPENSIONES), tramitado bajo el radicado No. 05001-31-05-006-2018-00211-01, venido a esta instancia en apelación de la parte demandante contra de la sentencia de primer grado.

AUTO

De conformidad con el memorial de sustitución de poder allegado vía correo electrónico junto con los alegatos de conclusión de segunda instancia por parte de la sociedad RST ASOCIADOS PROJECT S.A.S. quien representa judicialmente los intereses de Colpensiones en este proceso, se procede a reconocer personería a la abogada JENNY FERNANDA CORREA YEPES, portadora de la T.P. 238.719 del C. S. de la Judicatura, para que represente a Colpensiones en este proceso como apoderada sustituta.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES:

A través de la presente acción judicial, la demandante pretende que sea reconocida como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes de conformidad con el Decreto 3041 de 1966 y demás normas concordantes al caso, esto es, Decreto 758 de 1990, Ley 100 de 1993 y sentencias de la Corte Constitucional, así como todos los derechos que se despendan de dicha declaración, tales con servicios médicos, odontológicos, auxilios y demás reajustes pensionales. Subsidiariamente, pretende el reconocimiento

de la indemnización sustitutiva contemplada en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993. También solicita que se obligue a COLPENSIONES dar aplicación al artículo 27 del Decreto 3135 de 1968, en el sentido de proceder al pago de la indemnización sustitutiva correspondiente al tiempo cotizado por el causante, no solo en el ISS, sino en las entidades públicas en las que laboró, tales como MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, RAMA JUDICIAL y CAJANAL. De igual forma, solicita la indexación de las sumas a las que se llegare a condenar a la entidad y las costas del proceso.

Como fundamentos fácticos de sus pretensiones y en lo que interesa para resolver el recurso, expone la demandante, que el señor ORLANDO ARCINIEGAS GARCÍA falleció el 16 de septiembre de 1983, momento para el cual se encontraba casado con ella, conviviendo bajo el mismo techo hasta el momento del fallecimiento y de cuya unión procrearon 4 hijos, actualmente todos mayores de edad.

Aduce que, su cónyuge laboró para varias entidades del sector público y privado, razón por la cual solicitó a la entidad demandada mediante petición inicial del 26 de julio de 2013, pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de su cónyuge, siéndole negada por la entidad accionada en diversas oportunidades, no obstante, COLPENSIONES, le reconoció la indemnización sustitutiva en cuantía de \$15'055.757, cuando en realidad considera que según los cálculos, la entidad debió cancelar la suma de \$90'000.000.

De otro lado, aduce que en este caso se debe dar aplicación al principio constitucional de favorabilidad para lo cual la entidad debe reconocer el derecho a la pensión de sobrevivientes de la demandante, pues acredita los requisitos de ley para acceder a ella, por tener el causante al momento de su deceso más de 589 semanas, dando un efecto retrospectivo a la Ley por virtud del principio de favorabilidad establecido en el artículo 53 de la Constitución Nacional.

Finalmente, refiere que la entidad demandada reconoció la indemnización sustitutiva únicamente con las semanas cotizadas al ISS, dejando por fuera a las entidades estatales, quienes debían hacer la devolución de los dineros, pues la norma es clara cuando habla del derecho de repetición contra las otras entidades, a prorrata de lo correspondiente a cada una de ellas.

2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

La oficina judicial de la primera instancia, despachó desfavorablemente las pretensiones de la demanda, argumentando que a la luz de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, las normas aplicables para decidir sobre la pensión de sobrevivientes, son las vigentes al momento del fallecimiento del causante, de manera que como en este caso el afiliado falleció en el año 1983, para ese momento estaba vigente el Decreto 3041 de 1966, normativa que contempló que para dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, el afiliado debía contar con 150 semanas de cotización dentro de los 6 años anteriores al fallecimiento, de las cuales, 75 semanas debían haber sido cotizadas en los últimos 3 años, y en ese caso a pesar que el causante había cotizado en toda su vida laboral más de 300 semanas, ninguna de ellas fueron cotizadas en los últimos 3 años, no cumpliendo con ninguno de los presupuestos.

Finalmente, concluyó el *a quo* que no se podía dar aplicación a la condición más beneficiosa pretendida, porque buscaba aplicar una norma que fue creada con posterioridad al fallecimiento del causante, de manera que conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, no era posible dar aplicación a normas expedidas después de que se consolidara una situación particular.

En cuanto a la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, adujo el juez, que, para la época del deceso del afiliado, no existía ninguna obligación para la entidad de reconocer la citada indemnización por tiempos laborados para entidades públicas, por lo que la prestación reconocida por Colpensiones se encontraba ajustada a derecho.

3. DEL RECURSO DE APELACIÓN.

La apoderada de la demandante inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación, argumentando básicamente que la sentencia de primera instancia no había tenido en cuenta la norma que regula la condición más beneficiosa, basada en su propia posición con respecto a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, desconociendo los postulados de la Corte Constitucional, la cual dispone que la condición más beneficiosa, se debe aplicar a las personas que desean obtener una pensión. Por lo anterior, solicita a este Tribunal, la revocatoria de la sentencia, para que, en su lugar, se tengan en cuenta los hechos y pruebas de la demanda de la forma que fueron pedidas, solicitud que hace con fundamento en el Decreto 806 de 2020, que permite la sustentación del recurso en la segunda instancia al momento de presentar alegatos de conclusión. Adujo que tampoco se encuentra conforme con la

absolución de la indemnización sustitutiva, porque considera que el valor otorgado ni siquiera se acerca a la realidad económica, pues se está protegiendo más al estado que a los mismos beneficiarios de la citada prestación.

4. DE LAS ALEGACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA:

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, los apoderados judiciales de la DEMANDANTE y COLPENSIONES, presentaron alegatos, anotando textualmente lo siguiente:

ALEGATOS DE LA DEMANDANTE.

“LA SENTENCIA APELADA NIEGA DE FORMA ARBITRARIA EN SU TOTALIDAD LAS SUPlicas DE LA ACCIONANTE SEÑORA ANA CECILIA TORO DE ARCINIEGAS (MUJER DE LA TERCERA EDAD 83 AÑOS) AL CONSIDERAR LA FALLADORA DE PRIMERA INSTANCIA DE FORMA SUBJETIVA:

1. QUE LA ACCIONANTE TARDÓ MÁS DE 20 AÑOS PARA SOLICITAR EL DERECHO A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE.

2. QUE LA ACCIONANTE NO DEMOSTRÓ LA NECESIDAD DE DICHA PRESTACIÓN ECONÓMICA. (MÍNIMO VITAL).

3. QUE NO SE DEMOSTRÓ LA CONVIVENCIA BAJO EL MISMO TECHO, LECHO Y MESA A SABIENDAS QUE EN EL INTERIOR DE LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES” SE ENCUENTRA LA INVESTIGACIÓN Y VISITA DOMICILIARIA AUTORIZADA POR ESTA ENTIDAD PÚBLICA “COLPENSIONES” A LA CASA DE LA DEMANDANTE. (VER HECHO NOVENO DE LA DEMANDA PRINCIPAL).

4. LA FALLADORA DE PRIMERA INSTANCIA DE FORMA INTRÍNSECA SE APARTA DE SU CRITERIO DE FALLADOR PARA EVIDENCIAR EN AUDIENCIA DE FALLO EL QUERER PROTEGER A LA ENTIDAD PÚBLICA COLPENSIONES CUANDO MANIFIESTA: “...QUE DE HACERSE ESTE TIPO DE RECONOCIMIENTOS ABRIRÍA UNA BRECHA FINANCIERA AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES ESPECIALMENTE AL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA. DE IGUAL FORMA NIEGA LA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA AL CONSIDERAR “QUE EL SEÑOR ARCINIEGAS GARCÍA SOLO ESTUVO VINCULADO AL SISTEMA PENSIONAL DEL SEGURO

SOCIAL HOY COLPENSIONES, POR EMPLEADORES PARTICULARES, "...pues los tiempos en que se desempeñó como funcionario público, dicho régimen de los servidores públicos no contemplaba la prestación de indemnización sustitutiva de la pensión salvo que estuviera vinculado al régimen del seguro social que para esta caso nunca fue afiliado por entidad pública alguna..."; CONCLUYENDO QUE EN EL AÑO 1983 "...no existía obligación alguna por parte del instituto de los seguros sociales del reconocimiento y pago de indemnización sustitutiva por tiempos laborados para las referidas entidades públicas ni existe hoy la obligación de pagar por cuenta de dicha entidad "COLPENSIONES" la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes por tiempos que no correspondieran a afiliación con esta entidad...".

EL DEBER SER DE LA FALLADORA DE PRIMERA INSTANCIA ES DARLE APLICACIÓN AL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE FAVORABILIDAD, (SENTENCIA - SL3501 DE 2022 – RADICADION 92207 ACTA 27 – EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN ARMONIA CON EL ARTICULO 53 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL), POR LO CUAL LA AGENCIA JUDICIAL DEBE RECONOCER EL DERECHO A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE DE LA ACCIONANTE, Y DE ESTA FORMA PROTEGER SUS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, ESPECÍFICAMENTE A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE.

DE IGUAL MANERA TRASGREDE EL MÍNIMO VITAL, HABIDA CUENTA QUE SE ACREDITARON LOS REQUISITOS DE LEY PARA ACCEDER A DICHO DERECHO; DERECHO QUE ES DE RANGO CONSTITUCIONAL LOS MISMOS QUE A LA LETRA REZAN: A). POR HABER FALLECIDO EL SEÑOR ORLANDO ARCINIEGAS GARCÍA EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 1983 (SU CÓNYUGE CON EL CUAL CONVIVÍA BAJO EL MISMO TECHO, LECHO Y MESA ABRIGANDO A SU FAMILIA). B). POR TENER EL SEÑOR ORLANDO ARCINIEGAS GARCÍA AL MOMENTO DE SU DECESO EL ÍNDICE DE SEMANAS COTIZADAS PARA EL OTORGAMIENTO DE LO SOLICITADO EN EL PETITORIO DE LA DEMANDA. C). ESTAR DEBIDAMENTE PROBADO QUE EL CAUSANTE ESTABA DENTRO DEL RANGO DE SEMANAS COTIZADAS PARA DICHO DERECHO TAL COMO LO PRECEPTÚA EL DECRETO 3041 DE 1966 EL QUE A LA LETRA REZA: "... SI EL ASEGURADO FALLECIÓ ANTES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 1993, ESTO ES, ANTES DEL 01 DE ABRIL DE 1994, Y ANTES DE LA VIGENCIA DEL DECRETO 758 DE 1990 (ACUERDO 049 DE 1990 ARTÍCULOS 6 Y 25,.."), SE EXIGIRÁ COMO REQUISITO PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE QUE EL FALLECIDO HUBIESE COTIZADO PARA LOS RIESGOS DE IVM 150 SEMANAS DENTRO DE LOS 6 AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE LA MUERTE O 300

SEMANAS EN CUALQUIER ÉPOCA CON ANTERIORIDAD A LA MISMA EN CONCORDANCIA CON LOS EXIGIDOS EN EL DECRETO 758 DE 1990 CAPITULO PRESTACIONES EN CASO DE MUERTE. EN SUS ARTÍCULOS 25 Y LEY 100 DE 1993 LO QUE HACE QUE LA HOY ACCIONANTE SEÑORA ANA CECILIA TORO DE ARCINIEGAS SEA ACREEDORA DESDE EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ORLANDO ARCINIEGAS GARCIA DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE (ASÍ ÉSTA, NO LO HAYA SOLICITADO, ESTE DERECHO JAMÁS SE LE PODRÁ NEGAR PORQUE NACIÓ A LA VIDA JURIDICA POR EL ACTO NATURAL DE LA MUERTE Y ASÍ LO ESTABLECE LA NORMA COMO UN DERECHO INTRÍNSECO); A LA ACCIONANTE, MI REPRESENTADA LA SEÑORA ANA CECILIA TORO DE ARCINIEGAS, EN SU SOLICITUD LE APLICAN LAS POSTURAS PUBLICITADAS POR EL HONORABLE CONSEJO DE ESTADO EL QUE HA MANIFESTADO: "...Según el Consejo de Estado a la hora de reconocer la pensión de sobrevivientes, se debe aplicar la normatividad más beneficiosa así ésta sea posterior y no se encuentre vigente en la fecha en que falleció el causante. En este sentido, le han otorgado un efecto retrospectivo a la normatividad en virtud del principio de favorabilidad y del amparo del derecho de orden superior establecido en el artículo 53 de la constitución nacional...". (MAYUSCULAS Y NEGRILLAS FUERA DE TEXTO.)

ES EVIDENTE QUE A LA SEÑORA ANA CECILIA TORO DE ARCINIEGAS LE ASISTE DESDE EL MISMO MOMENTO EN QUE FALLECIÓ EL SEÑOR ARCINIEGAS GARCIA EL DERECHO DE OPTAR Y ACCEDER DE FORMA DIRECTA A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE Y EN CASO TAL COMO ACCESORIO A UNA JUSTA Y EQUITATIVA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA, MÁXIME CUANDO LOS CONTROLES EJERCIDOS POR LA ENTIDAD DEMANDADA EN LA VERIFICACIÓN DEL DERECHO QUE A ESTA LE ASISTEN YA FUERON TODOS Y CADA UNO DE ELLOS AGOTADOS POR LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES "COLPENSIONES".

EL DECRETO 3135 DE 1968, POR MEDIO DEL CUAL SE REGULÓ EL RÉGIMEN PRESTACIONAL (DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES), ESTABLECIÓ EN SU ARTÍCULO 27 QUE LOS MISMOS SERÍAN BENEFICIARIOS, ENTRE OTRAS PRESTACIONES, DEL DERECHO A QUE LA RESPECTIVA ENTIDAD DE PREVISIÓN PAGUE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN. ASÍ MISMO, EN SU ARTÍCULO 28 DETERMINÓ QUE LA ENTIDAD DE PREVISIÓN ENCARGADA DEL PAGO DE LA PENSIÓN TENDRÍA DERECHO A REPETIR CONTRA LOS ORGANISMOS NO AFILIADOS A ELLA A PRORRATA DEL TIEMPO

QUE EL PENSIONADO HUBIERA SERVIDO DE ELLOS...” “...ESTE DECRETO FUE REGULADO A TRAVÉS DEL DECRETO 1848 DE 1969, EL CUAL EN SU ARTÍCULO 72 ESTABLECIÓ LA POSIBILIDAD DE ACUMULAR EL TIEMPO DE SERVICIO PRESTADOS A DISTINTAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO, CASO EN EL CUAL EL MONTO DE LA PENSIÓN SE DISTRIBUIRÍA EN PROPORCIÓN AL TIEMPO SERVIDO EN CADA UNA DE ESTAS ENTIDADES. ACERCA DEL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN, EL NUMERAL 1º DEL ARTÍCULO 75 DE DICHA NORMA ESTABLECIÓ QUE LA MISMA SERÍA RECONOCIDA Y PAGADA POR LA ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL A LA CUAL SE ENCONTRABA AFILIADO EL TRABAJADOR Y EN CASO DE QUE EL TRABAJADOR NO SE ENCONTRARA AFILIADO A NINGUNA ENTIDAD DE PREVISIÓN, EL NUMERAL 2 DE DICHO ARTÍCULO DISPUSO QUE EL RECONOCIMIENTO Y PAGO LO DEBÍA REALIZAR LA ÚLTIMA ENTIDAD O EMPRESA EMPLEADORA, QUIEN EN CASO DE ACUMULACIÓN DE TIEMPO DE SERVICIOS TIENE DERECHO A REPETIR CONTRA LAS ENTIDADES Y EMPRESAS OBLIGADAS AL REEMBOLSO DE LA CANTIDAD PROPORCIONAL QUE LES CORRESPONDA. POSTERIORMENTE LA LEY 33 DE 1985 EN SU ARTÍCULO 2º RATIFICÓ LO DISPUESTO RESPECTO DE LA ACUMULACIÓN DE TIEMPO DE SERVICIOS Y LA POSIBILIDAD QUE TIENE DE REPETIR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REALIZAR EL PAGO DE LA PENSIÓN. AL RESPECTO ESTABLECIÓ: “ARTÍCULO 2: LA CAJA DE PREVISIÓN OBLIGADA AL PAGO DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN, TENDRÁ DERECHO A REPETIR CONTRA LOS ORGANISMOS NO AFILIADOS A ELLAS, O CONTRA LAS RESPECTIVAS CAJAS DE PREVISIÓN, A PRORRATA DEL TIEMPO QUE EL PENSIONADO HUBIERE SERVIDO O APORTADO A ELLOS. EL PROYECTO DE LIQUIDACIÓN SERÁ NOTIFICADO A LOS ORGANISMOS DEUDORES, LOS QUE DISPONDRÁN DEL TÉRMINO DE QUINCE (15) DÍAS PARA OBJETARLO, VENCIDO EL CUAL SE ENTENDERÁ ACEPTADO POR ELLOS. PARA LOS EFECTOS PREVISTOS EN ESTE ARTÍCULO, EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EFECTUARÁ ANUALMENTE LAS COMPENSACIONES A QUE HAYA LUGAR, CON CARGO A LOS GIROS QUE LES CORRESPONDAN A LOS ORGANISMOS O CAJAS, POR CONCEPTO DE APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL; CUANDO SE TRATE DE ENTIDADES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL, INTENDENCIAL, COMISARIAL, MUNICIPAL O DEL DISTRITO ESPECIAL DE BOGOTÁ, LA COMPENSACIÓN ANUAL SE EFECTUARÁ CON CARGO A LAS CORRESPONDIENTES TRANSFERENCIAS DE IMPUESTOS NACIONALES. DEL RECUENTO NORMATIVO SE CONCLUYE QUE LA ÚLTIMA ENTIDAD EMPLEADORA SERÁ LA RESPONSABLE DEL RECONOCIMIENTO DE LAS

PRESTACIONES DE LOS EMPLEADOS OFICIALES BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN QUE NO FUERON AFILIADOS A NINGUNA ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL. PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA PRESTACIÓN SOCIAL SE DEBE ACUMULAR EL TIEMPO DE SERVICIO EN TODAS LAS ENTIDADES DEL ESTADO DONDE TRABAJÓ Y ÉSTAS DEBERÁN RESPONDER PROPORCIONALMENTE...” (MAYUSCULAS FUERA DE TEXTO). LO QUE FUE ESQUINIADO EN SU TOTALIDAD POR LA FALLADORA DE PRIMERA INSTANCIA.

LA AGENCIA JUDICIAL DE PRIMERA INSTANCIA EN SU PROVIDENCIA DEL 06 DE JULIO DE 2021 EN VIRTUD DE LAS NORMAS CITADAS, DESCONOCIÓ QUE ES POSIBLE REPETIR CONTRA LAS DEMÁS ENTIDADES CUANDO HAY RECONOCIMIENTO A UNA PENSIÓN EN LA CUOTA PARTE CORRESPONDIENTE, ESTA MISMA ES APLICABLE CUANDO SE TRATA DEL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA POR LO TANTO ES “COLPENSIONES” QUIEN DEBE DAR APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD EXISTENTE Y VIGENTE POR LA LLAMADA ECONOMÍA PROCESAL Y COMO TAL PROCEDER AL PAGO DE LO SOLICITADO (LLAMESE LA PENSION DE SOBREVIVIENTE Y/O LA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA CORRESPONDIENTE AL TIEMPO COTIZADO DEL CAUSANTE, NO SOLO EN “COLPENSIONES” SINO TAMBIÉN EN LA ENTIDADES PÚBLICAS DEL ESTADO (MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, LA RAMA JUDICIAL, CAJANAL)

ES POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO QUE RUEGO REVOCAR EN TODAS SUS PARTES LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA PROCEDIENDO A REVOCAR EN TODAS SUS PARTES LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA RECONOCIENDOLE A LA SEÑORA ANA CECILIA TORO DE ARCINEIGAS LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 3041 DE 1966, Y LAS NORMAS CONCORDANTES EN ESPECIAL EL DECRETO 758 DE 1990 EN SU CAPITULO PRESTACIONES EN CASO DE MUERTE. - ARTÍCULO 25. ADEMÁS DEL DEBER DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 100 DE 1993 DE SEGURIDAD SOCIAL, EN SU CAPÍTULO SEGUNDO, ART. 33 AL 37 Y LAS DEMÁS NORMAS CONCORDANTES APLICABLES AL CASO. DE IGUAL MANERA SE DEBE TENER EN CUENTA LOS PRECEDENTES CONSTITUCIONALES COMO: 1. SENTENCIA S.CL 37552 DE 2011; 2. SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL T-584/09 Y 3. SENTENCIA T-587A/12- APLICACIÓN ULTRACTIVA DE LA LEY EN PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES.

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS

PRIMERO: DE NO PROSPERAR LA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE REITERAR EL RECONOCIMIENTO DE LA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DEBIDAMENTE LIQUIDADADA CONFORME A LA FORMULA ACTUARIAL EXISTENTE. AL MOMENTO DE LIQUIDAR DICHO RECONOCIMIENTO - ARTÍCULO 37 DE LA LEY 100 DE 1993. (VER ANEXO DE LIQUIDACIÓN ACTUARIAL OBRANTE EN EL ACÁPITE DE PRUEBAS DEL CUADERNO PRINCIPAL DE LA DEMANDA)

SEGUNDO: ORDENARLE A “COLPENSIONES” PROCEDER A APLICAR EL DECRETO 3135 DE 1968 ARTICULO 27 PROCEDIENDO A REALIZAR EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA CORRESPONDIENTE AL TIEMPO COTIZADO POR EL CAUSANTE NO SOLO: 1. EN EL INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES ISS, HOY COLPENSIONES, SINO TAMBIÉN, AL PAGO DE LO COTIZADO POR EL CAUSANTE EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, 3. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, RAMA JUDICIAL, CAJANAL.

TERCERO: DE CONCEDERSE, 1. PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE O 2. INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA, ESTAS DEBEN SER INDEXADAS AL VALOR PRESENTE.

CUARTO: CONDÉNESE A “COLPENSIONES” AL PAGO DE LAS COSTAS DEL PROCESO QUE INCLUYAN AGENCIAS EN DERECHO A QUE HAYA LUGAR...”. EN SU DEFECTO ABSOLVER A LA DEMANDANTE DE CUALQUIER PAGO CONDENATORIO.

SU EXCELENCIA PROCEDA TAL COMO LO ORDENA LA NORMA Y LOS PRECEDENTES CONSTITUCIONALES A CONCEDER LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA DANDO APLICACIÓN AL PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA AQUEL QUE “...protege las expectativas legítimas, ante cambios normativos abruptos que impongan requisitos adicionales que impidan o dificulten en extremo la consolidación de un derecho, frente al cual una persona tiene confianza en su consolidación; principio que se relaciona con los de buena fe (en su expresión de confianza legítima) y favorabilidad...”. SENTENCIA T-378/17. LA CORTE CONSTITUCIONAL PROFIRIÓ RECIENTEMENTE UNA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN, EN LA QUE AFIRMÓ QUE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA ABARCA LA APLICACIÓN DE TODO RÉGIMEN “Conforme al cual la persona haya reunido los requisitos para acceder al beneficio”. Así lo señaló la sentencia SU-442 de

2016[40]: “En concepto de la Sala Plena de la Corte, el principio de la condición más beneficiosa no se restringe exclusivamente a admitir u ordenar la aplicación de la norma inmediatamente anterior a la vigente, sino que se extiende a todo esquema normativo anterior bajo cuyo amparo el afiliado o beneficiario haya contraído una expectativa legítima, concebida conforme a la jurisprudencia. Por lo demás, una vez la jurisprudencia ha interpretado que la condición más beneficiosa admite sujetar la pensión de invalidez a reglas bajo cuya vigencia se contrajo una expectativa legítima, no puede apartarse de esa orientación en un sentido restrictivo, a menos que se ofrezcan razones poderosas suficientes que muestren que: (i) la nueva posición tiene mejor sustento en el orden legal y constitucional, (ii) los argumentos para apartarse priman sobre los principios de seguridad jurídica, confianza legítima e igualdad de trato que están a la base del respeto al precedente constitucional, y (iii) está en condiciones de desvirtuar la prohibición de retroceso injustificado en materia de derechos sociales fundamentales, establecida en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia. ...” 4.6. Con base en lo anterior, es posible concluir que, en reiterada jurisprudencia fundamentada en la Constitución Política, los tratados internacionales y las normas internas de nuestro país, se ha señalado que es posible permitir que los trabajadores accedan a las prestaciones pensionales acudiendo al principio de la condición más beneficiosa, aplicando cualquier régimen conforme al cual se hayan cumplido los requerimientos para acceder a la prestación solicitada...”

ALEGATOS DE COLPENSIONES.

El Decreto 3041 de 1966 respecto de la pensión de sobrevivientes indica:

“ARTÍCULO 20. Cuando la muerte sea de origen no profesional, habrá derecho a pensiones de sobrevivientes en los siguientes casos:

- a. Cuando a la fecha del fallecimiento el asegurado hubiere reunido las condiciones de tiempo y densidad de cotizaciones que se exigen, según el artículo 5 para el derecho a pensión de invalidez;
- b. Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando de pensión de invalidez o de vejez según el presente reglamento.

ARTÍCULO 21. La pensión a favor del cónyuge sobreviviente será igual a un cincuenta por ciento (50%) y la de cada huérfano con derecho igual a un veinte por ciento (20%) de la pensión de invalidez o de vejez, que tenía asignada el causante, o de lo que le habría correspondido a la fecha del fallecimiento excluidos los aumentos dispuesto en el artículo 16 del presente reglamento. Cuando se trate de huérfanos de padre y madre, la cuantía de la pensión se elevará hasta el treinta por ciento (30%) para cada uno.”

Asimismo, el Artículo 5° respecto de los requisitos de la pensión de invalidez, disponía en su artículo original, antes de la modificación introducida por el Decreto 232 de 1984 lo siguiente:

- “a. Ser inválido permanente conforme a lo preceptuado en el artículo 45 de la ley 90 de 1948;
- b. Tener acreditadas ciento cincuenta (150) semanas de cotización dentro de los seis (6) años anteriores a la invalidez, setenta y cinco (75) de las cuales deben corresponder a los últimos tres (3) años.”

Al revisar la Historia Laboral del causante, se evidencia que la última cotización realizada al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones fue el 31 de enero de 1973, y cuenta con un total de 317 semanas cotizadas de las cuales cero (0) semanas cotizadas corresponden a los últimos 6 años inmediatamente anteriores a su fallecimiento, motivo por el cual no resulta procedente el reconocimiento pensional bajo los criterios establecidos en el Decreto 3041 de 1966.

Respecto del reconocimiento prestacional solicitado por la parte demandante acorde a lo descrito en el Decreto 758 de 1990 y la Ley 100 de 1993, es necesario exponer que la Corte Constitucional en diferentes providencias se ha manifestado en cuanto al principio de irretroactividad de la Ley, explicándolo como:

“el fenómeno según el cual la ley nueva rige todos los hechos y actos que se produzcan a partir de su vigencia. Obviamente, si una situación jurídica se ha consolidado completamente bajo la ley antigua, no existe propiamente un conflicto de leyes, como tampoco se da el mismo cuando los hechos o situaciones que deben ser regulados se generan durante la vigencia de la ley nueva

(...)

Una nueva ley, dispone tal principio fundamental para la seguridad jurídica en el Estado Social de Derecho, no puede regular las situaciones jurídicas del pasado que ya se han definido o consolidado, y que por tanto resultan incólumes en sus efectos jurídicos, con la fuerza que les presta la ley bajo la cual se constituyeron.”

Ahora bien, frente a las peticiones subsidiarias de reliquidación de la Indemnización Sustitutiva de Sobrevivientes, sea lo primero señalar que el artículo 49 de la Ley 100 de 1993, frente a la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes estableció:

“ARTÍCULO 49. INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. Los miembros del grupo familiar del afiliado que al momento de su muerte no hubiese reunido los requisitos exigidos para la pensión de sobrevivientes, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a la que le

hubiera correspondido en el caso de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, prevista en el artículo 37 de la presente Ley.”

Aunado a lo anterior, el artículo 3 del Decreto 1730 de 2001, en lo atinente a la fórmula de liquidación de las indemnizaciones sustitutivas, adujo:

“Para determinar el valor de la indemnización se aplicará la siguiente fórmula:

$$I = SBC \times SC \times PPC$$

Donde:

SBC: Es el salario base de la liquidación de la cotización semanal promediado de acuerdo con los factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los cuales cotizó el afiliado a la administradora que va a efectuar el reconocimiento, actualizado anualmente con base en la variación del IPC según certificación del DANE.

SC: Es la suma de las semanas cotizadas a la administradora que va a efectuar el reconocimiento.

PPC: Es el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales ha cotizado el afiliado para el riesgo de vejez, invalidez o muerte por riesgo común, a la administradora que va a efectuar el reconocimiento.”

En concordancia, la Corte Constitucional en la Sentencia T 122 de 2016, indicó: En efecto, el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 consagró la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez indicando que esta es una prestación económica a la que tiene derecho un trabajador cuando cumplió la edad mínima necesaria para consolidar el derecho pensional, pero no tiene la cantidad de semanas de cotización exigidas y se declare en imposibilidad de continuar realizando aportes, casos en los cuales, en sustitución, percibirán una indemnización en la que se tendrá en cuenta el número de semanas que cotizó y se aplicará la regla de liquidación que el Congreso fijó en el comentado aparte legal.

Conforme historia laboral, registra un número de 317 semanas cotizadas, igual que las tenidas en cuenta por la Resolución No. SUB 274595 del 29 de noviembre de 2017, y se tuvo en cuenta para la liquidación todos los periodos cotizados y debidamente actualizados hasta la fecha de reconocimiento, por tanto, la prestación reconocida por parte de la presente Entidad se encuentra conforme a derecho.

5. PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER.

El problema jurídico a resolver se circunscribe a establecer si a la demandante, le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente conforme los requisitos legales y jurisprudenciales exigidos para tal fin, como consecuencia del fallecimiento del señor ORLANDO ARCINIEGAS GARCÍA, o subsidiariamente el reajuste de la indemnización sustitutiva a cargo de COLPENSIONES.

Tramitado el proceso en legal forma, y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la apelación de la sentencia de primera instancia, conforme a lo dispuesto en el Art. 10 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes,

6. CONSIDERACIONES:

La Sala se ocupará del estudio del recurso de apelación, con apego al imperativo contenido en el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad social, según el cual: *“La sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”*.

Para resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante, sea lo primero manifestar que como quiera que el causante de la pensión pretendida por la actora falleció el **16 de septiembre de 1983**, conforme se anota en la copia del registro civil de defunción obrante a folio 28 del archivo N°1 del expediente digital, la norma legal a aplicar para definir el derecho que tenga o no la demandante a la pensión denominada de viudedad en esa fecha, hoy de sobrevivientes, son en principio los Arts. 20 y 21 del Decreto 3041 de 1966, que regulan los derechos pensionales de los afiliados al Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS) disponían lo siguiente:

“Artículo 20. Cuando la muerte sea de origen no profesional, habrá derecho a pensiones de sobrevivientes en los siguientes casos:

a) Cuando a la fecha del fallecimiento el asegurado hubiere reunido las condiciones de tiempo y densidad de cotizaciones que se exigen según el artículo 5º, para el derecho a pensión de invalidez,

b) Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando de pensión de invalidez o de vejez según el presente reglamento.”

“Artículo 21. La pensión a favor del cónyuge sobreviviente será igual a un cincuenta por ciento (50%) y la de cada huérano con derecho igual a un veinte por ciento (20%) de la pensión de invalidez o de vejez, que tenía asignada el causante, o de lo que le habría correspondido a la fecha del fallecimiento excluidos los aumentos dispuesto en

el artículo 16 del presente reglamento. Cuando se trate de huérfanos de padre y madre, la cuantía de la pensión se elevará hasta el treinta por ciento (30%) para cada uno.”

En consecuencia, según la sección a) del artículo 20 del Decreto 3041 de 1966, los requisitos necesarios para acceder al derecho a la pensión de sobrevivientes correspondían a la densidad de semanas necesaria para acceder a la pensión de invalidez, prevista por la sección b) del artículo 5, que en su versión original establecía lo siguiente:

“ARTICULO 5o. Tendrán derecho a la pensión de invalidez los asegurados que reúnan las siguientes condiciones:

(...)

b. Tener acreditadas ciento cincuenta (150) semanas de cotización dentro de los seis (6) años anteriores a la invalidez, setenta y cinco (75) de las cuales deben corresponder a los últimos tres (3) años.” (Negrillas agregada)

Luego, el artículo 1º del Decreto 232 de 1984 modificó los requisitos previstos por el artículo 5º del Decreto 3041 de 1966, en los siguientes términos:

Artículo primero. El artículo 59 del Acuerdo 224 de 1966 aprobado por Decreto 3041 del mismo año quedará así:

Tendrán derecho a pensión por invalidez los asegurados que reúnan las siguientes condiciones:

[...]

b) Tener acreditadas 150 semanas de cotización para los riesgos de invalidez, vejez y muerte I. V. M., dentro de los seis (6) años anteriores a la invalidez o 300 semanas de cotización en cualquier época”. (Negrillas agregada)

De esta manera, dada la claridad de las normas mencionadas, es incuestionable que, a la fecha del fallecimiento del causante, se encontraba vigente el texto original del Decreto 3041 de 1966, antes de la modificación introducida por el Decreto 232 de 1984, de manera que la condición para causar el derecho a la pensión de sobrevivientes, es haber cotizado 150 semanas dentro de los seis años anteriores al deceso, 75 de las cuales, debía corresponder a los últimos 3 años.

En relación con lo anterior, en este caso el causante de la pensión pretendida realizó la última cotización al sistema en enero de 1973, según da cuenta la historia laboral obrante entre folios 217 a 221 del archivo N°1 del expediente digital, de manera que no dejó acreditado el requisito de las 150 semanas cotizadas dentro de los seis (6) años anteriores a su deceso, y menos alcanzó a cotizar en los 3 últimos años anteriores al fallecimiento las 75 semanas de que trata la norma anterior, por lo que,

el fallecido ORLANDO ARCINIEGAS GARCÍA, no dejó causado el derecho a que sus posibles beneficiarios pudieran acceder a la pensión de sobrevivientes.

Ahora, la parte actora consiente que no cumple los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes, con la norma original del artículo 20 del Decreto 3041 de 1966, solicita la aplicación del principio constitucional de la condición más beneficiosa y que en ese sentido, se recurra al Acuerdo 049 de 1993, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, el cual dispone que para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, únicamente se requería contar con 150 semanas de cotización- para los riesgos de invalidez, vejez y muerte I. V. M., dentro de los seis (6) años anteriores a la invalidez o 300 semanas de cotización en cualquier época.

No obstante lo señalado, es preciso indicar que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha sido pacífica en sostener que, en principio, dado el efecto inmediato de la ley y el carácter no retrospectivo de las disposiciones laborales y de seguridad social, la muerte del afiliado es el hito o momento que marca la aplicación en el tiempo de la normativa que ha de regular el derecho de los beneficiarios de la prestación reclamada, es decir que **las normas de derecho del trabajo y de la seguridad social rigen hacia futuro y tienen efecto general inmediato**, de manera que está prohibida la aplicación retroactiva de la ley frente a situaciones que ya se consolidaron en el pasado o que se consumaron anteriormente, con el fin de procurar seguridad jurídica y estabilidad de las relaciones entre los diversos actores del mundo del trabajo y del sistema de seguridad social. Así se ha explicado en las decisiones CSJ SL, 17 de sep. 2008, rad. 34904; CSJ SL834–2013; CSJ SL8430-2014; CSJ SL10147-2017; CSJ SL3115-2018 y CSJ SL1889-2020, entre otras, en las que se ha sido enfática en explicar que la muerte del afiliado es la que consolida la situación jurídica y la que causa el derecho a la pensión de sobrevivientes, por lo que resulta contrario al efecto general inmediato de las normas sobre trabajo y seguridad social, pretender aplicar disposiciones que no se encontraban vigentes en ese momento. Esto, según lo previsto por el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, que excluye la posibilidad de aplicar las normas laborales y de la seguridad social de forma retroactiva.

Ahora bien, dice la parte recurrente que el juez de instancia desconoció el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, la que permite la aplicación de otras normativas para poder acceder a la pensión de sobrevivientes en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, no obstante, la jurisprudencia de dicha Corte, ha sido enfática en determinar que, en virtud de la aplicación del artículo 53 de

la Constitución Política, es posible aplicar de manera ultractiva las disposiciones de un **régimen anterior**, en cuanto al requisito de las semanas de cotización, para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, dado que, la postura de dicha Corte, busca proteger todas aquellas expectativas que pudieran verse afectadas ante el cambio abrupto de reglas normativas posteriores para acceder a la pensión de sobrevivientes, pues la expectativa creada por la normativa, había generado un grado de certeza e inminencia en la consolidación del derecho, susceptible de ser protegido ante el cambio abrupto que supondría la entrada en vigencia de una norma posterior (Ver al respecto sentencia SU005 de 2018).

En ilación con lo anterior, la característica principal de la condición más beneficiosa, tiene su razón de ser en que opera con normatividades anteriores a la vigente al momento del siniestro, de manera que si la norma que regula el caso es el Decreto 3041 de 1966, como ocurre en el presente asunto, no es posible acudir a normas posteriores como el Decreto 758 de 1990, porque no se trata de explorar, hacia adelante o hacia atrás, cuál es la normativa que mejor se ajusta al asunto, sino salvaguardar las expectativas legítimas de quienes se han visto afectados por un cambio de legislación sin un régimen de transición que lo regule.

Las anteriores razones, son suficientes para concluir que las consideraciones expuestas por la Juez de Instancia, se encuentran ajustadas a derecho, lo que da razón para CONFIRMAR la sentencia, en cuanto a la absolución de la pensión de sobrevivientes.

Seguidamente se estudia la solicitud de **indemnización sustitutiva**, con el reconocimiento los tiempos servidos en entidades del sector público sin cotización al ISS.

En este proceso se encuentra acreditado que a la demandante le fue reconocida por parte de COLPENSIONES, la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de su cónyuge ORLANDO ARCINIEGAS GARCÍA mediante Resolución SUB274595 del 29 de noviembre de 2017, en cuantía de \$15'055.757, teniendo en cuenta para el efecto únicamente las semanas cotizadas al ISS y no los tiempos de servicios no cotizados a dicha entidad, ello según da cuenta el documento obrante entre folios 97 a 105 del archivo N°1 del expediente digitalizado.

Para resolver la cuestión litigiosa, debe la Sala traer a colación, lo indicado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de justicia como máximo órgano de cierre

de la justicia ordinaria laboral, quien en sentencia SL2304 del 26 de mayo de 2021 razonó:

“...Para la época de vigencia de los reglamentos del ISS, ellos eran expedidos con base en la autorización impartida por los arts. 9.º y 16 la Ley 90 de 1946 y las normas que la modificaron o sustituyeron (Decreto Ley 433 de 1971, arts. 10-2 y 31 y Decreto Ley 1650 de 1977, arts. 11, 17 y 43-e) es decir, tales actos debían sujetarse a esas normas superiores que reglaron las fuentes financieras del sistema (art. 16), cuya base descansaba sobre un trípode conformado *por una contribución forzosa de los asegurados, de los patronos y del Estado* y que, en todo caso, téngase presente, requerían aprobación del Gobierno Nacional, entre otras razones, para asegurar la armonía con las normas superiores a las cuales estaban subordinados y a las políticas públicas sobre esas materias, en una suerte de control de tutela.

Para el caso particular del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo año, el artículo 32 ordenó:

ARTICULO 32. Los recursos para financiar las prestaciones de estos seguros y para cubrir los gastos administrativos de su gestión *serán obtenidos mediante las cotizaciones* calculadas actuarialmente y el rendimiento de la inversión de las reservas de dicho seguro.

A su turno, el artículo 33 señaló los porcentajes *crecientes* de cotización tripartita en un horizonte de 25 años, el artículo 34 consignó una revisión cada cinco (5) años para determinar *la suficiencia de sus recursos y reservas* y el artículo 35 expresó con meridiana claridad que:

ARTICULO 35. No se podrá efectuar ningún *aumento o modificación* de las prestaciones señaladas en el presente reglamento, si antes no se ha realizado un análisis actuarial de la situación financiera y de las *consecuencias económicas que impliquen las modificaciones o reajustes*. (Subrayas y cursivas de la Sala).

Todo lo anterior muestra que sí existía una regulación legal y reglamentaria de la *cotización* como fuente de pago de las prestaciones económicas a reconocer, sustentada en un modelo financiero y matemático, que debía ser revisado periódicamente y que no podía ser alterado sin que previamente se efectuaran y validaran los estudios pertinentes.

Ello explica el por qué en ese esquema de los reglamentos del ISS, con fundamento en la ley, sólo las cotizaciones efectivamente percibidas por esa entidad eran tenidas en cuenta para el reconocimiento de las prestaciones que fueron reguladas a lo largo del tiempo.

Obviamente, la legislación no es estática, menos en el campo de lo social y, por ello, tratando de equilibrar la balanza y reconociendo que las personas pueden trabajar indistintamente en el sector público y en el privado, hizo su aparición la llamada pensión por aportes, consignada en la Ley 71 de 1988, promulgada el 19 de diciembre de ese año, que autorizó por primera vez la mixtura de contribuciones, con los alcances que más adelante la daría la sentencia CSJ SL4457-2014, con lo cual era claro que antes de esa normativa, tal combinación no era posible.”

Conforme a la sentencia en cita, no es posible para efectos del reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes que regulaba el Decreto 3041 de 1966, tener en cuenta además de las cotizaciones efectuadas al ISS hoy COLPENSIONES, los tiempos públicos en que no hubo cotización a ninguna entidad, para financiar las prestaciones que contemplaba dicha norma, ya que nótese que la posibilidad de acumular tiempos públicos y privados para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez, solo se contempló con la expedición de la Ley 71 de 1988, es decir, varios años después del fallecimiento del causante, por lo que para el momento del deceso, no existía ninguna norma legal que permitiera tener en cuenta para el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, los tiempos públicos sin cotización al ISS, de manera que la solicitud efectuada por la demandante de incluir dichos tiempos para la reliquidación de la prestación que ya le fue reconocida, no tiene fundamento alguno y es por esta razón que considera la Sala que la decisión de la *a quo* de absolver también de esta pretensión debe ser CONFIRMADA.

Ahora no desconoce la Sala la amplia jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia, como de la Corte Constitucional sobre la obligación de tener en cuenta los tiempos públicos sin cotización al ISS o a otra Caja o fondo de pensiones laborados o cotizados antes de la Ley 100 de 1993 para otorgar la indemnización sustitutiva de vejez, que se podría aplicar también a la de sobreviviente, pero esto ha sido bajo el requisito que tal indemnización se haya causado o se haya hecho exigible en vigencia de la Ley 100 de 1993, pues es esta Ley que se permite la acumulación de tiempos públicos con o sin cotización para reconocer las prestaciones que esta Ley otorga, sin embargo en este caso, el derecho a tal indemnización, se causó en la fecha del óbito del causante es decir el 16 de septiembre de 1983, por lo que no es factible aplicar las previsiones de la Ley 100 de 1993.

Ahora si la demandante considera que por los tiempos laborados o cotizados por el causante en entidades distintas a COLPENSIONES se le corresponde alguna indemnización, debe petitionar ante la entidad correspondiente y accionar judicialmente si le es negada y considera tener el derecho.

Costas en esta instancia y a favor de COLPENSIONES, a cargo de la demandante por haber sido vencida en el recurso de apelación. Las agencias en derecho, conforme al Nral. 3 del Artículo 366 del CGP, las estima el ponente en la suma de \$1'160.000.

7. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR íntegramente la sentencia del 06 de julio de 2021 proferida por el JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por **ANA CECILIA TORO DE ARCINIEGAS** contra **COLPENSIONES**, en cuanto absolvió a esta entidad de las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la demandante y a favor de COLPENSIONES. Las agencias en derecho, conforme al Nral. 3 del Artículo 366 del CGP, las estima el ponente en la suma de \$1'160.000.

La anterior sentencia se notifica a las partes por EDICTO.

Oportunamente devuélvase el expediente al juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, y se firma la providencia por quienes intervinieron en la decisión,

Los magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **8121b23b62cad5862b1c7d978a5240b5a179cdfcd54f64e87bed7d7f5561eb2**

Documento generado en 13/04/2023 04:06:23 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>